SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 10/2013

Recomendación N°	10/2011
Autoridad Responsable	Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí
Expediente	1VQU-0139/2011
Fecha de emisión/	10 DE JUNIO DE 2013
HECHOS	
<p>El 6 de julio de 2011, D1, solicitó la intervención de este Organismo Estatal, ya que en las instalaciones que la Procuraduría General de Justicia tiene habilitadas como Casa de Arraigo, se encontraban detenidos V1, V2 y V3, y eran víctimas de violaciones a sus derechos humanos.</p> <p>Las víctimas manifestaron que el 1 de julio de 2011, V1 y V2 se encontraban a bordo de un vehículo afuera del domicilio de V3, ubicado en la Colonia Julián Carrillo de esta Ciudad, cuando llegaron seis personas vestidas de civil quienes se ostentaron como agentes de la Policía Ministerial del Estado y con violencia procedieron a detenerlos, mientras que a V3 lo sacaron del interior de su domicilio.</p> <p>Una vez detenidos fueron esposados y trasladados al Edificio de Seguridad Pública del Estado, sitio donde fueron víctimas de golpes y maltrato físico que le infligieron los aprehensores, para que “confesaran” diversos robos e inculparan a otra persona como líder de una banda delictiva, dándoles a firmar diversos documentos cuyo contenido no les permitieron leer bajo la amenaza de continuar golpeándolos; incluso, señalaron que un agente del Ministerio Público les tomó su declaración sin la presencia de un abogado defensor. Los agentes que los maltrataron obedecían órdenes de AR3.</p> <p>En la Casa de Arraigo, permanecieron incomunicados y recibieron golpes y amenazas de parte de los policías, quienes los obligaron a firmar documentos cuyo contenido desconocen.</p> <p>Para la investigación de la queja, se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se entrevistó a víctimas y testigos cuya valoración es objeto de análisis, en el capítulo de Observaciones de la presente Recomendación.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la integridad y seguridad personales. ✓ A la inviolabilidad del domicilio. ✓ Una defensa adecuada.
OBSERVACIONES	
<p>Este Organismo Estatal hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones que en derecho correspondan.</p> <p>Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias, se lograron acreditar conductas que configuran violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personales, a la inviolabilidad del domicilio y a una defensa adecuada, en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y AR10, agentes de la Policía Ministerial del Estado y agente del Ministerio Público, consistentes en el maltrato en la detención, el ingreso a domicilio de V3, sin haber mostrado orden legal, así como la falta de</p>	

nombramiento de defensor.

Es preciso señalar que con relación al hecho de que los agraviados fueron obligados a firmar declaraciones auto inculpatorias sin la presencia de abogado defensor; de la investigación realizada por personal de esta Comisión Estatal, se observó que en las declaraciones ministeriales rendidas por los quejosos y que obran en las Causas Penales 1 y 2, sí contaron con la asistencia del defensor de oficio. No obstante, en el caso de V3, se advirtió que indebidamente fue asistido por P1, persona de su confianza, sin que sea profesional en derecho.

Ahora bien, de lo anterior se acreditó que V1, V2 y V3 fueron víctimas de maltrato físico durante la detención, en su estancia en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado localizadas en el interior del Edificio de Seguridad Pública y en la Casa de Arraigo, en virtud de que presentaron escoriaciones en distintas partes de su cuerpo. Dichas lesiones fueron corroboradas al momento de la entrevista con personal de este Organismo Estatal, cuando habían transcurrido más de cinco días desde su detención. Las víctimas coincidieron en señalar que las alteraciones en su salud fueron provocadas por elementos adscritos a la Subdirección de Investigaciones Relevantes.

Los elementos integrados al expediente de queja, permiten acreditar que V1, V2 y V3 presentaron alteraciones a su salud, que consistieron en escoriaciones, lo cual se corroboró con las fotografías así como con los certificados de ingreso al Centro Penitenciario de 20 y 23 de julio de 2011. Ahora bien, tomando en consideración las características de las lesiones, no se advierten datos de que hayan sido infligidas con motivo de haberse resistido a la detención y los aprehensores tampoco señalaron que los agraviados hayan opuesto resistencia.

Las Víctimas V1, V2 y V3, efectuaron el reconocimiento de los servidores públicos que vulneraron sus derechos humanos a la integridad y seguridad personales, mediante fotografías y señalaron como sus agresores a AR1, AR2, AR3, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 todos ellos agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Al haberse acreditado maltrato durante la detención en agravio de V1, V2 y V3, se transgredió su derecho a la integridad y seguridad personal, prerrogativa que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión conserva, es decir que la autoridad que actúa como aprehensora, desde el momento mismo de la captura, se responsabiliza en su totalidad respecto de la salud e integridad física, por tanto cualquier afectación en este ámbito acontecida durante el tiempo que la persona permanezca en detención, sin duda le es reprochable al servidor público.

Este derecho humano se encuentra tutelado por el artículo 19 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo que señalan los artículos 7º y 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el numeral 1º del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, 3º y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales señalan que todo maltrato en la detención y toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que deberán reprimir las autoridades, que nadie puede ser detenido de manera arbitraria y que toda persona privada de su libertad debe ser tratada humanamente y con

respeto a su dignidad.

Con relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, se encontraron elementos suficientes que hacen presumir que V3 fue sustraído del interior del domicilio sin que existiera orden de autoridad competente para poder realizarlo. La aseveración sobre este hecho, se refuerza con lo que señalaron D2, V1 y V2, quienes se encontraban presentes en circunstancias de tiempo y lugar en que acontecieron, ya que D2 manifestó encontrarse en el interior de la casa, mientras que V1 y V2 se encontraban en el exterior del domicilio, y fueron coincidentes en su testimonio de que V3 fue sacado del interior de su vivienda por agentes de la Policía Ministerial del Estado. Por el contrario, la autoridad señalada como responsable no fue precisa en indicar el lugar exacto en donde ocurrió la detención de V3, ya que en su informe solamente se limitó a señalar que AR1 y AR2 procedieron a la detención de V1, V2 y V3, sin precisar con detalle el lugar en que detuvieron a V3.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye una prerrogativa fundamental de protección de la persona, establecida para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que elige, y que se caracteriza para evitar agresiones injustas del exterior, de otras personas o de la autoridad pública. El domicilio de las personas es un espacio en el cual el individuo vive y ejerce su libertad más íntima. La inviolabilidad del domicilio impone como requisito para efectuar cualquier penetración una orden de autoridad judicial, lo que en el presente caso no ocurrió.

En consecuencia, se advierte que con su acción, AR1, AR2 y AR3, se apartaron de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que tutelan la inviolabilidad del domicilio como los artículos 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el numeral IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales señalan que el domicilio de las personas es inviolable y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas.

En lo que corresponde al derecho la adecuada defensa, se observó que V3, en su declaración ministerial rendida a las 23:25 del 1 de julio de 2011 ante AR10, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, no fue asistido por Abogado, apartándose de lo dispuesto en el artículo 20 apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según consta en la copia certificada de la declaración ministerial; circunstancia que colocó al agraviado en estado de indefensión. Es importante señalar que el derecho humano de toda persona acusada de un delito a contar con una defensa adecuada, tanto en la fase de detención como en la del proceso penal, es un derecho fundamental para garantizar un juicio justo.

El debido proceso legal, dentro del cual se engloba el derecho a la defensa, se encuentra reconocido y tutelado en el derecho internacional de los derechos humanos, en los numerales 14.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; más en el marco del sistema interamericano en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales señalan que es un derecho irrenunciable del inculpado ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente

con él.

Este Organismo Constitucional Autónomo cuenta con elementos para que, de conformidad con los artículos 75 fracción XVII con relación al 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la Visitaduría General de esa Institución integre y turne ante los órganos internos de control competentes los elementos de convicción para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los servidores públicos por las violaciones a derechos humanos que aquí han quedado descritas.

Al acreditarse las violaciones a los derechos humanos atribuibles a los servidores públicos del Estado, la recomendación se formula a la dependencia pública para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado. De conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, como una manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus facultades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas. Lo anterior de acuerdo al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuesto en el párrafo 346 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se inicie una investigación de los hechos, y en su oportunidad turne el asunto ante el órgano de control competente, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación.

SEGUNDA. Se inicie el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de AR10, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, por las consideraciones que quedaron asentadas en la presente Recomendación.

TERCERA. Que los agentes de la Policía Ministerial reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, particularmente sobre los derechos que prevalecen en la detención y aprehensión de las personas.

CUARTA. Que los agentes del Ministerio Público reciban capacitación en derechos humanos, particularmente sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, debiendo remitir la constancia que acredite su cumplimiento.